

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ - SECCIÓN TERCERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

JUEZ	Magda Cristina Castañeda Parra
Ref. Expediente	110013343-064-2018-00414-00
Demandante	CONSTRUCCIONES AR&S S.A.S. ¹
Demandado	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU ²

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
PRESCINDE AUDIENCIA INICIAL Y DE PRUEBAS
DECRETA PRUEBAS DOCUMENTALES
FIJA LITIGIO

En el presente asunto, se encuentra vencido el término de traslado de la demanda, y conforme a la entrada en vigencia de la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, que reformó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se torna obligatorio decidir sobre el trámite a impartir a este asunto, en razón a que las normas procesales son de orden público y de inmediato cumplimiento.

Respecto a la vigencia de la citada Ley 2080 de 2021, el artículo 86 estableció:

*“(…) **ARTÍCULO 86. Régimen de vigencia y transición normativa.** La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de: los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.*

Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, e aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento

¹ Correos: gerencia@construccionesarys.com, juridica@construccionesarys.com y trivarsa@gmail.com.

² Correos: notificacionesjudiciales@idu.gov.co y ricardo.herrera@idu.gov.co.

de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones.

(..)”

Teniendo en cuenta que la Ley 2080 de 2021 empezó a regir a partir del 25 de enero de 2021, fecha de su publicación, y que para ese momento el presente proceso se encontraba vencido el término de traslado de la demanda y pendiente para citar a audiencia inicial, resulta claro que este caso, son las nuevas normas procesales las que devienen de obligatoria aplicación para continuar con el respectivo trámite.

En el caso bajo estudio, revisado el expediente se observa que con la demanda se aportaron pruebas documentales y, a su turno, la entidad demandada **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU** contestó oportunamente la demanda, por lo que, en cuanto al extremo pasivo, no se decretaran pruebas distintas a las allegadas por este.

El artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, que adicionó el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece los eventos en los cuales es viable dictar sentencia anticipada por escrito, e igualmente faculta al juez para que previo a ello decrete las pruebas a que haya lugar.

“(...) Artículo 42. Adiciónese a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual será del siguiente tenor:

Artículo 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada:

1. Antes de la audiencia inicial:

a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;

b) Cuando no haya que practicar pruebas;

c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tachas o desconocimiento;

d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

(...)”

Al respecto, se puede concluir que a tenor de lo previsto en la precitada norma, se torna innecesario llevar a cabo audiencia inicial, cuando concorra alguno de los eventos allí consagrados para dictar sentencia anticipada por escrito, antes de celebrarse aquella.

El despacho se pronunciará sobre las pruebas aportadas y solicitadas, así:

DE LA PARTE DEMANDANTE

Documentales aportadas

Por considerarlos pertinentes, conducentes y útiles se estima conveniente tener como prueba los documentos aducidos con la demanda, los cuales serán valorados y analizados según el mérito legal que les corresponda en la debida oportunidad procesal.

Dictamen pericial

El extremo pasivo en el libelo, respecto de esta prueba, se limitó a indicar: *“Se anuncia que se aportará dictamen pericial de acuerdo al artículo 227 del Código General del Proceso.”*

Respecto a esta lacónica manifestación, debe advertir el Despacho que las oportunidades probatorias en los procesos que se adelantan ante la jurisdicción de los contencioso administrativo, están establecidas en el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011, precepto en virtud del cual, el dictamen pericial debía aportarse, en lo que al extremo activo se refiere, con la demanda o su reforma, con la reforma a la demanda, con la contestación a una eventual demanda de reconvención o con los incidentes.

En el presente asunto estos momentos procesales ya han sido agotados y revisado el expediente, no se ha propuesto ningún tipo de incidente.

El demandante alude al artículo 227 del CGP alude como regla general a que, la parte que pretenda valerse de un dictamen pericial **deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas**. No obstante, cuando el término previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podrá anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que el juez conceda.

Como es sabido, al tenor del artículo 226 del CGP, la prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.

Tal como se evidenció, la parte demandante se limitó a indicar que aportaría un dictamen pero no expresó el propósito u objeto de este, y un sustento siquiera sumario de su pertinencia, conducencia y utilidad al proceso. Por lo que, en estos términos, el Despacho negará la práctica de tal experticia.

Por lo anterior, SE NIEGA el decreto del dictamen anunciado por el extremo activo.

DE LA PARTE DEMANDADA

Documentales aportadas

Por considerarlos pertinentes, conducentes y útiles se estima conveniente tener como prueba los documentos aducidos con la contestación de la demanda, los cuales serán

valorados y analizados según el mérito legal que les corresponda en la debida oportunidad procesal.

En tales condiciones, teniendo en cuenta que las pruebas faltantes decretadas en precedencia son de carácter netamente documental, se concluye que se torna innecesario citar tanto a audiencia inicial como de práctica de pruebas.

Por consiguiente, de acuerdo con los hechos y pretensiones de la demanda, la contestación de la demanda y las pruebas aquí decretadas, el litigio quedará establecido de la siguiente manera:

-FIJACIÓN DEL LITIGIO

El Despacho advierte que una vez revisados los hechos que fundamentan la demanda, así como los argumentos expuestos en la contestación de esta, se permite fijar el litigio en el presente asunto, en los siguientes términos:

- Determinar si las Resoluciones No. 010301³ y 11040⁴ de 2016 son legales, o si por el contrario adolecen de algún vicio con la magnitud de extraerlas del ordenamiento jurídico.
- En caso de que los actos administrativos mencionados deban ser declarados nulos, establecer si son procedentes las medidas de restablecimiento del derecho pretendidas por el extremo activo.

En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en los literales b y c y, los incisos primero y segundo numeral 1 del artículo 182A de la Ley 2080 de 2021, que adicionó el artículo 182 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se ordenará rendir por escrito los respectivos alegatos de conclusión y se procederá a dictar sentencia anticipada por escrito.

Por lo anterior el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: TENER POR CONTESTADA LA DEMANDA por la demandada INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU.

SEGUNDO: PRESCINDIR de la audiencia inicial con el fin de proceder a emitir fallo por escrito, de conformidad en el artículo 182A de la Ley 2080 de 2021.

TERCERO: DECRETAR las pruebas **DOCUMENTALES** aportadas por las partes en las condiciones ordenadas en esta providencia.

³ Por medio de la cual se adopta decisión dentro de la actuación administrativa iniciada para determinar el posible incumplimiento y la sanción establecida en el contrato No. 1947-2014.

⁴ Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos frente a la Resolución No. 010301 del 21 de noviembre de 2016.

CUARTO: NEGAR la **PRUEBA PERICIAL** anunciada por el extremo activo, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente auto.

QUINTO: ABSTENERSE de citar a audiencia de pruebas, por las razones plasmadas en esta decisión.

SEXTO: FIJAR el litigio en los términos que quedaron reseñados en las consideraciones del presente auto, así.

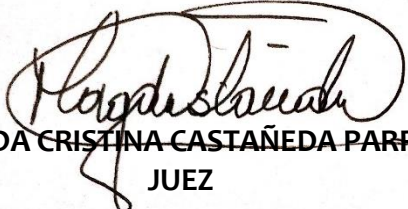
- Determinar si las Resoluciones No. 010301⁵ y 11040⁶ de 2016 son legales, o si por el contrario adolecen de algún vicio con la magnitud de extraerlas del ordenamiento jurídico.
- En caso de que los actos administrativos mencionados deban ser declarados nulos, establecer si son procedentes las medidas de restablecimiento del derecho pretendidas por el extremo activo.

SÉPTIMO: ADVERTIR a las partes que todo escrito y sus anexos que dirijan a este Juzgado con destino al proceso, deberán remitirlos a las demás partes procesales "*simultáneamente con copia incorporada al mensaje enviado a la autoridad judicial*". Conforme a lo dispuesto al artículo 3 del Decreto 806 de 2020 y al artículo. 3.- inciso primero ACUERDO PCSJA20-11567 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

OCTAVO: Ejecutoriada la presente decisión, **ORDENAR** la presentación por escrito de los alegatos de conclusión dentro de los diez (10) días siguientes, vencidos los cuales se procederá a dictar sentencia anticipada en el término de veinte (20) días siguientes al vencimiento de aquel concedido para presentar alegatos. En las mismas oportunidades señaladas para alegar podrá el Ministerio Público presentar el concepto si a bien lo tiene.

NOVENO: RECONOCER personería al Doctor **RICARDO HERRERA URREGO** identificado con cédula de ciudadanía No 79.311.191 y T.P. No 139.430 del CSJ., para actuar en representación de la parte demandada INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, en los términos del poder visible a folios 567-569 del plenario.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,


MAGDA CRISTINA CASTAÑEDA PARRA
JUEZ

CASZ

⁵ Por medio de la cual se adopta decisión dentro de la actuación administrativa iniciada para determinar el posible incumplimiento y la sanción establecida en el contrato No. 1947-2014.

⁶ Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos frente a la Resolución No. 010301 del 21 de noviembre de 2016.